La partidocracia legislativa mexicana: Su antiideología como elemento de análisis

Enoc Francisco Morán Torres

El presidencialismo mexicano se transformó en una partidocracia sin que ésta se encuentre acotada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que los ciudadanos adolecen de medios de participación eficaces que permitan cuestionar, avalar e impugnar las conductas partidocráticas que afectan la gobernabilidad del país.

Introducción

La presente aportación tiene como objetivo proponer un modelo basado en el factor ideológico de los partidos políticos, para el estudio del fenómeno partidocrático que se presenta en el poder legislativo y que ha logrado empoderar a las referidas entidades de interés público en un nivel que si bien les ha permitido ser artífices solitarios de las grandes decisiones que han impactado en el país, también los distancian cada día más de la ciudadanía.

Por lo que, en el presente trabajo académico, se toma como ejemplo al Partido de la Revolución Democrática en cuanto a partidocracia legislativa desde la Cámara de Diputados se refiere, aunque ello no implica de ninguna manera que dicho instituto político sea el único que realice prácticas partidocráticas en con-

traposición a su ideología partidaria ni que la Cámara en comento sea la única del Congreso de la Unión en la que se presentan las citadas prácticas.

Concepto de ideología partidaria

Aristóteles manifestó que el hombre es un “zon politikon”, es decir, es un hombre que está en relación con los demás hombres en cuanto a lo social, cultural y sin lugar a duda en la política.

En ese sentido, cuando se busca teorizar sobre la palabra política, es posible pensar tanto en discursos o teorías lógicas, como en el desarrollo de determinado grupo que busca alcanzar el poder para cumplir con sus propósitos partiendo de una ideología. Por lo que resulta plausible ubicar, entre otros, dos modos de percibir la política: la visión de Burdeau y García Pelayo.

George Burdeau define la política como una “actividad ya desarrollada por los gobernantes, ya por la sociedad con miras a ocupar funciones de dirección en donde se deriva que la política capta los fenómenos en su aspecto dinámico, en lo que atañe a la actividad dirigida tanto a la conquista como al ejercicio del poder” (Osorio, 2000: 770).

Ahora bien, a diferencia de Burdeau, García Pelayo define la política como una “realidad social específica caracterizada por la conversión, mediante un proceso integrador, de una pluralidad de hombres y de esfuerzo en una unanimidad de poder y de resultados capaz de asegurar la convivencia pacífica en el interior y la existencia autónoma frente al exterior” es decir, se refiere a cómo las relaciones interpersonales en el esfuerzo son capaces de hacer verdaderos cambios para todos” (Osorio, 2000: 770).

Ante esta doble vertiente de política es necesario precisar que el presente trabajo se referirá a la política de partido, es decir, al concepto que maneja George Burdeau del grupo que pretende alcanzar el poder para fines propios. Por lo que resulta pertinente acotar que, para dicho cometido, este grupo de personas parten de una ideología que fija las bases de su actuar. Esto es, resulta evidente que el binomio partido político-vertiente ideológica es *conditio sine qua non* para la definición y orientación de su actuar.

Ahora bien, en el contexto de la política mexicana, históricamente se ubican tres partidos que son los que han agrupado la mayor fuerza electoral: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los cuales en congruencia con su ideología deben de conducir sus acciones en beneficio de la colectividad. Sin embargo, no se puede soslayar la existencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mismo que en el pasado proceso electoral ordinario federal 2017-2018 obtuvo la mayoría de diputaciones federales, senadurías y la presidencia de la república, además de gubernaturas y la mayoría de las legislaturas estatales, trayendo como consecuencia una recomposición del mapa político-electoral y del entramado de fuerzas políticas en el sistema de partidos y en el poder legislativo local y federal. Por lo que Morena es la entidad de interés público con mayor fuerza electoral en México, según los datos registrados en el INE y de conformidad con los parámetros existentes para determinar dicha fuerza.

En este sentido podemos decir que los partidos políticos sufren profundamente la influencia de sus orígenes. Sin embargo, parece ser que al final, en términos de Duverger (1996: 15): “El desarrollo de los partidos políticos parece ligado al de democracia, es decir, al de la extensión del sufragio popular y de las prerrogativas parlamentarias”; esto es, en sus actividades diarias no actúan de acuerdo a su ideología como partido, sino con base a las conveniencias personales o de la cúpula partidista de la cual depende su continuidad en la arena política y que los obligan a tomar decisiones autoconcebidas como populares que les reditúan en votos, para valorar dicho factor se considera apropiado hacerlo a partir de las funciones legislativas.

Ahora bien, “cuando más ven crecer sus funciones y su independencia las asambleas políticas, más sienten sus miembros la necesidad de agruparse por afinidades, a fin de actuar de acuerdo a su ideología” (Duverger, 1996: 15). Por lo que, el concepto de ideología partidaria recobra especial interés para analizar las prácticas partidocráticas asumidas por los legisladores y su relación como mandato popular.

La ideología como mandato popular

Para Holgado González (2003), los partidos políticos en los sistemas electorales con democracia madura dan como resultado un congreso plural en el que se aprecian claramente las distintas fracciones ideológicas de la sociedad, pues los ciudadanos eligen a sus representantes populares, teniendo presente el proyecto político ideológico que representa cada partido.

La actual sociedad de la comunicación ofrece a los partidos la posibilidad de transmitir con mayor claridad su ideología, impensable en los tiempos de los partidos de masas, que gradualmente tienden a volverse partidos de cuadros. La inmediatez de los mítines que los líderes partidarios y candidatos, ofrecían a los simpatizantes y militantes del partido de masas, se sustituye por la de los mensajes en los medios de comunicación televisados, alcanzando una difusión incomparable al grado de que ya se habla de, según Sartori, de la "telecracia" (Holgado, 2003:8), por lo que se piensa que las promesas de los partidos contemporáneos adquieren el carácter de un verdadero compromiso ideológico, más claro y del que es testigo toda la opinión pública cuando se realizan, por ejemplo, en los medios de comunicación o se discuten en los debates electorales televisados.

Aunado a lo expuesto con antelación, el uso de las redes sociales se ha masificado de tal manera que un número importante de partidos y actores políticos, servidores públicos y ciudadanos, hacen gala de las redes sociales como instrumento para compartir información de cualquier naturaleza y abreviar de ella. De hecho, el goce y restricción del derecho humano a la libertad de expresión se ventila y dirime en la arena de las multireferidas redes, especialmente cuando se trata de la materia política, representando la dicotomía si éstas deben ser reguladas en el derecho positivo mexicano o restringidas.

En esa tesitura, se espera de los representantes, impulsados por candidaturas de partidos políticos y libremente elegidos, que se guíen por el proyecto ideológico ofrecido a los electores y registrado como plataforma electoral ante la autoridad administrativa electoral. De lo contrario, el programa electoral perdería su sentido racionalizador del ejercicio del sufragio y éste se convertiría en

un voto a ciegas, que ni siquiera cabría encuadrar en una relación de confianza elector-representante, ya que el voto se decide en atención a unas siglas ideológicas ofertadas en el momento del registro de un partido o del registro de un candidato. Y es que, si los programas electorales y los compromisos ideológicos asumidos durante la campaña pierden valor al día siguiente de las elecciones, entonces se cometería el error de seguir fincando la democracia en los votantes y no en los ciudadanos. Puesto que, en términos de Guillermo O'Donnell (2007: 18), la democracia está redirigiendo constantemente la mirada de los ciudadanos de un presente, más o menos insatisfactorio, hacia un futuro de posibilidades todavía incompletas.

De hecho, aún el llamado voto de conciencia de los legisladores, no puede pasar por alto el compromiso político hacia un programa ideológico. Así, el mandato popular que cada diputado ha obtenido es producto de la voluntad de quienes le eligieron, aunque ello no es óbice para considerar que tal determinación de voluntad se ve influenciada por la exposición de un programa ideológico jurídicamente lícito. Esto es, la fidelidad a este compromiso ideológico no puede ser desconocida ni obviada. Por tanto, ese principio de libertad de conciencia de los legisladores se ve caracterizado por un proyecto político y por una determinada ideología: la de su partido.

El alejamiento del partido político de su ideología resulta ilegítimo desde este punto de vista, y tal deslealtad hacia los electores que votaron por el partido es ideológicamente censurable, pero lo es aún más cuando tal conducta adquiere mayores dimensiones de deslealtad porque, frente a una pluralidad de opciones ideológicas en el momento de la decisión electoral, el elector eligió libremente la que le pareció más adecuada y es ésta la que promovió la entidad de interés público durante la campaña de sus candidatos. Por lo que, el partido político no puede, lisa y llanamente, desvincularse de su postulación.

Ahora bien, es cierto que estamos ante un compromiso ideológico que no es exigible jurisdiccionalmente, pero ello no le priva necesariamente del valor éticamente vinculante, ya que pueden existir otros mecanismos de control social que incluso pueden

llegar a ser más eficaces. En un plano político, para los electores a la hora de volver a votar adquiere especial relevancia la gestión realizada por la fracción partidista anterior en el Congreso y el cumplimiento del programa ideológico del partido correspondiente, sea como mayoría que direcciona ideológicamente o como minoría que hace contrapeso ideológico. Aspecto que adquiere mayor relevancia con la figura de la elección consecutiva o reelección inmediata.

Además, en la explicación teórica del parlamento, el Congreso funciona, con fracciones de partidos ideológicamente disciplinados, lo que, en teoría, debiera hacer predecibles los resultados de los debates y votaciones. Como consecuencia de ello, el Congreso aparece claramente dividido en mayorías gobernantes y minorías opositoras, desempeñando unas y otras funciones distintas. Las mayorías, alineándose con el gobierno desde la legislatura, van a cooperar en cierto modo en la función de dirección ideológica. Por su parte, la oposición asumirá la función de contrapeso ideológico del ejecutivo, a la vez que se muestra al electorado como alternativa ideológica de gobierno.

En ese sentido, esa debiera ser la naturaleza ideológica del mandato popular, particularmente en el caso de los diputados, pero que no está reflejada en las normas constitucionales en el caso de nuestro país, donde los legisladores no adquieren carta de naturaleza ideológica, al grado de que pueden renunciar a la bandera ideológica que les mandató el voto popular, sin perder por ello la representación popular. Así el protagonista en la relación representativa es el diputado y no la ideología que abanderó en campaña y con lo que el poder del legislador más que institucional, se vuelve individual. La ideología es como si no existiera, como si fuera sólo un *slogan* publicitario de campaña que se disuelve una vez que concluyó el proceso electoral.

De hecho, una práctica común que debilita la práctica parlamentaria es el transfugismo el cual resulta aplicable al servidor público, cuyo origen es la elección popular, que cambia de ideología o del partido o movimiento que lo postuló y no al ciudadano que cambia de opción ideológica (Morán, 2017: 17). De esta forma, el tráfuga representa una deslealtad para el ciudadano que le votó

quien, para efectos de emisión del sufragio, asoció al candidato con la entidad de interés público que lo impulsó y para el propio partido que lo postuló, en el caso de las candidaturas por la vía de partido.

Ante ello, los ciudadanos se extrañan cuando ven que las expectativas ideológicas pueden ser alteradas por el comportamiento de diputados que no son fieles al proyecto con el que se comprometieron ante el electorado, sin que la legislación constitucional —en el caso de México— sancione nada al respecto, ante la indisciplina ideológica que en el mejor de los casos tiene que ver con un voto de conciencia, pero en el peor, y por lo general, tiene que ver con intereses inconfesables de carácter personal o grupal que fortalecen la partidocracia, vista como la degeneración del sistema de partidos en los que una élite decide el rumbo de la agenda política, la agenda pública y el control de los partidos políticos, dejando al ciudadano relegado para que emita el sufragio en los términos y las condiciones que dicha élite determina (Morán, 2017).

La solución óptima para que precisamente ese mandato ideológico sea eficaz, es replantear partidos verdaderamente ideológicos en su estructura constitucional como fracciones parlamentarias. La dificultad de lograr esa anhelada democracia ideológica de los partidos se debe, como señalara Duverger, fundamentalmente a su carácter necesariamente competitivo (Holgado, 2003:17), que les lleva a privilegiar estrategias pragmáticas electorales, por sobre compromisos ideológicos de largo aliento que acotarían la partidocracia y harían de los representantes populares verdaderos mandatarios de las distintas ideologías que emanan de la sociedad y le permitiría a ésta, ser genuinamente representada.

Lo anterior constituiría una señal inequívoca de que los canales de la democracia han llegado a su plena madurez, al grado de ser capaces de desahogar conflictos sociales de largo alcance, como el narcotráfico, siendo hoy por hoy el talón de Aquiles de una democracia en crisis, sin rumbo ideológico y donde la partidocracia está representando una perversión del mandato popular y ha relegado la participación ciudadana al último eslabón de la larga cadena de las prioridades del sistema político, dotándole a la ciudadanía de paliativos democráticos mediante vacuas reformas constitucionales y legales en materia política y electoral.

La partidocracia como perversión del mandato popular

El mandato popular y su ineluctable vínculo con los actores partidocráticos han generado severos cuestionamientos sobre la viabilidad de que el mandato subsista hasta que los referidos actores concluyan el periodo para el cual fueron electos, a pesar de las acciones partidocráticas que estos ejecuten y que cada día son más comunes; con la esperanza de que sea la mayoría del pueblo, mediante las urnas, quien decida si dicho sujeto continúa en la escena política en futuros cargos de elección popular.

Es por ello que el tema del mandato popular debe ser revisado para buscar garantizar que la clase política, con cargos de responsabilidad, se ciña a la ley, busque el interés colectivo y sea congruente con los documentos básicos del partido político que lo postuló y en los cuales los ciudadanos creyeron, depositando su confianza en las urnas con la expectativa del cumplimiento de las promesas de campaña pregonadas por los candidatos o registradas como plataforma electoral por los partidos políticos.

Lo anterior, sin menoscabo de la importancia que reviste que los legisladores antepongan los intereses de la nación sobre los propios o los de la élite partidocrática que los postula o los apoya y permite su avance en la carrera política, tal es el caso que, para efectos de la elección consecutiva de munícipes y legisladores, el aspirante debe ser propuesto por el mismo partido que le postuló en la elección inmediata anterior. Circunstancia que propugna por la disciplina partidaria y el control de las élites partidistas sobre sus militantes y sobre los servidores públicos emanados de elecciones populares.

Las prácticas partidocráticas en el estado han impactado desfavorablemente en el ánimo de la ciudadanía y en el propio del electorado, a tal nivel que en las últimas elecciones locales y federales se ha presentado el fenómeno del voto en blanco, como una manifestación de la no conformidad popular con las opciones políticas presentadas —incluyendo las candidaturas independientes— y la poca oferta, en términos de plataforma electoral, presentada durante la campaña electoral máxime si los gobernantes

tes en turno no cumplen con las expectativas generadas durante el proceso electoral que, a la postre, les permitió ser electos y se alejan de los principios ideológicos que enarbolaron y que sólo se invocan cuando el discurso político lo demanda.

Además, se debe de considerar que las tomas de tribuna en la Cámara de Diputados; la no aprobación de iniciativas legislativas por el simple hecho de provenir de partido político con el cual se tiene, en ese momento, diferencias; el manejo ilegal de recursos públicos; los pleitos frívolos entre actores políticos; la nula rendición de cuentas sobre el trabajo parlamentario; la falta de medios de control de la eficacia de la ley aprobada y los pactos en la clandestinidad en materia de alianzas electorales, en muchos de los casos han logrado que la ciudadanía crea menos en la clase política y cuestione la actuación de los propios partidos, considerados en el artículo 41 de nuestra carta fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como entidades de interés público.

Los anteriores factores han generado que la partidocracia se convierta en una perversión del mandato popular, puesto que las y los legisladores han ponderado los intereses partidistas, económicos y electorales a los intereses realmente importantes para el país y han frenado una serie de iniciativas que coadyuvarían decididamente el desarrollo del país.

Por lo que, la participación de la ciudadanía aún se ve limitada a recurrir a las urnas para elegir a quien ocupará el cargo público y deja a las instituciones que sean las responsables de la vigilancia, fiscalización y sanción. Ello, en detrimento del papel proactivo que debe de jugar el ciudadano en la vigilancia de la actuación de sus gobernantes, puesto que una democracia con mayor nivel de consolidación cuenta con una ciudadanía informada y participativa en el ámbito público.

Sin embargo, en algunas legislaciones se ha previsto con mayor y menor éxito la revocación de mandato como un medio de control que permite sancionar a los servidores públicos que no cumplan con la ley que juraron acatar, lo que implica que el ciudadano tiene la potestad de retirar la confianza al gobernante.

Ante todo lo acontecido en la última década en México, debería haber una catarsis de los partidos políticos para tener mayor acercamiento con los electores, detentadores originarios de la soberanía y clientes recurrentes para legitimar, en las urnas, la actuación de las élites partidocráticas, sin menoscabo de la ideología partidaria y del propio mandato popular. De lo contrario, seguirá la tendencia proclive a una antiideología partidaria.

La ideología en la partidocracia legislativa mexicana

Para Andrés Luetich (2002), todas las ideologías políticas pueden reducirse, en última instancia, a cuatro fundamentales: liberalismo, socialismo, nacionalismo y anarquismo; sin embargo, para el autor, en la práctica política nunca se encuentran en estado puro, sino combinadas de diversas formas, ya que entre las cuatro ideologías fundamentales no hay dos que se opongan en todo. Se podría decir que son equidistantes entre sí, en las cuestiones de mayor importancia, cada una coincide con otra y se opone a las restantes dos. El autor utiliza tres criterios de clasificación: a) Primacía del individuo o del grupo; b) Aceptación o rechazo de la propiedad privada; y c) Relación con el *mito* racionalista del progreso.

En la *primacía del individuo o del grupo*, el ser humano y tal como le conocemos, vive en relación con otros humanos. No hay sociedad sin individuos ni individuos sin sociedad. Al reflexionar sobre esta mutua relación, algunos autores asignan mayor importancia a uno de los dos términos y colocan al otro a su servicio. Según este criterio, las cuatro ideologías políticas fundamentales pueden ser divididas en dos grupos: los totalistas, que son socialismo y nacionalismo, y que priorizan al grupo; y las individualistas, liberalismo y anarquismo, que dan prioridad al individuo.

El segundo criterio de clasificación, *aceptación o rechazo de la propiedad privada*, del régimen de propiedad depende, en definitiva, toda la organización económica de la sociedad. Algunos entienden que en la propiedad privada de los medios de producción reside el origen de todos los males sociales; otros, por su parte, la consideran indispensable para la marcha de la economía y para el ejercicio efectivo de la libertad individual. Según este criterio,

las cuatro ideologías políticas fundamentales pueden ser divididas en dos grupos: las contrarias a la propiedad privada, socialismo y anarquismo; y las que están a favor de la propiedad privada, liberalismo y nacionalismo.

El tercer criterio de clasificación, *relación con el mito racionalista del progreso*, ¿es la historia un camino gobernado por un sentido, por una ley racional que la rige y orienta más allá de las decisiones de los individuos y los grupos hacia un destino de perfección? Muchos lo creen así y piensan y actúan convencidos de colaborar con el desarrollo que la historia impone al hombre en cuanto camino de paulatino perfeccionamiento. Otros, por el contrario, descreyendo de todo finalismo, basan sus propuestas en la decisión personal de individuos o grupos limitados sólo por su contexto y su propia capacidad, o aceptan un cierto finalismo, pero de tipo romántico, no racionalista, cuyos protagonistas son los pueblos con sus particularidades. Según este criterio, las cuatro ideologías políticas fundamentales pueden dividirse en dos grupos: las progresistas: socialismo y liberalismo; y las románticas o no racionalistas: anarquismo y nacionalismo.

En el anterior contexto de los criterios de Luetich, es que se propone el análisis de las ideologías de los cuatro partidos más representativos en nuestro país; PRI, PAN, PRD y Morena; sin dejar de considerar que a veces la ideología resulta hipotética porque los partidos en México se han vuelto bastante pragmáticos, al no existir un marco legal que exija el acotamiento y distinción de las ideologías, como función y razón de ser de los partidos en las democracias maduras que apuestan más a la ideología que a los liderazgos de los candidatos. Sin embargo, como ejercicio metodológico se propone, y conforme al historial de cada uno de los cuatro partidos, una tabla de clasificación ideológica en la que al PRI se le asigna fundamentalmente un carácter nacionalista, por su identificación histórica con el movimiento revolucionario y constitucionalista mexicano de 1910-1917; al PAN se le asigna esencialmente un carácter liberal por su vinculación tradicional con la economía de mercado a través del sector empresarial mexicano desde su fundación en 1939; en el caso del PRD se le asigna una ideología tendiente al socialismo por su vinculación con la iz-

quiera mexicana y con el movimiento de inspiración cardenista histórica, a partir de su fundación en 1989; mientras que a Morena se le asigna una ideología de un progreso fuerte hacia un comunismo social.

Una vez apuntado lo anterior, resulta procedente identificar la ubicación ideológica de los cuatro partidos políticos con mayor fuerza electoral en México, a partir de los resultados que arrojó la última elección presidencial en 2018.

En efecto, la contienda electoral de 2018 trajo, entre otros efectos no menos importantes, la reconfiguración de las fuerzas políticas en México y el desplazamiento del llamado partido hegemónico al tercer lugar de la fuerza electoral. Esto es, atendiendo al número de votos que los partidos políticos obtuvieron en la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, se advierte lo siguiente: el PAN 9'898,840 votos (17.7%); el PRI 9'197,913 votos (16.4%); el PRD 2'840,400 votos (5.1%); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 2'615,724 votos (4.7%); el Partido del Trabajo (PT) 1'934,092 votos (3.5%); el partido Movimiento Ciudadano (MC) 2'373,165 votos (4.2%); el partido Nueva Alianza (NA) 1'350,806 votos (2.4%); el partido Morena 20'474,523 votos (36.6%) y el Partido Encuentro Social (PES) 1'117,394 votos (2.0%) (INE, 2018).

De los datos precisados con antelación, se advierte que los cuatro partidos políticos con mayor fuerza electoral en México son los siguientes: Morena, PRI y PRD.

Ahora bien, con la finalidad de dimensionar la esencia de los partidos políticos en comento y la importancia que dicho *substratum* tiene en términos ideológicos, en el cuadro I se propone la identificación de la ideología hipotética de las multirreferidas entidades de interés público, conforme a la clasificación de Luetich.

Más aún, la ideología de los partidos políticos referidos con antelación se desprende de la revisión realizada a los documentos básicos que poseen, principalmente en la parte relativa a la declaración de principios de cada una de las entidades de interés público en comento. Por lo que, en líneas precedentes se incorpora la citada revisión en el orden que establece la fuerza electoral de cada uno de los partidos políticos.

Cuadro I

Identificación de la ideología hipotética de los partidos políticos en México con mayor fuerza electoral

Partidos políticos con mayor fuerza electoral	Primacía del individuo o del grupo	Aceptación o rechazo de la propiedad privada	Relación fuerte o débil con el concepto de progreso
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)	Totalitarismo socialista	Propiedad socialista	Progreso <i>fuerte</i> hacia un comunismo social
Partido Acción Nacional (PAN)	Individualismo liberal	Propiedad privada liberal	Progreso liberal fuertemente anclado en el mercado
Partido Revolucionario Institucional (PRI)	Totalitarismo nacionalista	Propiedad privada nacionalista	Progreso <i>débil</i> acotado por el respeto a tradiciones armónicas con la naturaleza
Partido de la Revolución Democrática (PRD)	Socialismo democrático	Propiedad privada sin relevancia	Progreso con estructuras estatizadas

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación propuesta por Luetich (2002).

En la *Declaración de principios de Morena* (2010), en el párrafo 1 se menciona:

El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos, la Constitución Política, las leyes y las instituciones que de ella emanen; y un elemento determinante, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. No nos mueve el odio, sino el amor al prójimo y a la patria. Los cambios que planteamos los realizamos y realizaremos obligándonos a observar la Constitución y las leyes nacionales.

Lo anterior, denota la ideología socialista de izquierda, como resultado de luchas políticas; tiene como base la democracia y la participación activa del pueblo en torno a un objetivo común.

En el párrafo 8, se menciona:

MORENA forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo, la

dignidad, la justicia, la democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la soberanía nacional.

Es claro que el mencionado partido busca ponderar y respetar en todo momento los derechos sociales y lograr que existan mayores márgenes de democracia ciudadana y pluriculturalidad.

En el parágrafo 10 se enuncia: "Nuestro principal objetivo es construir una sociedad libre, justa, solidaria, democrática y fraterna". De lo anterior podemos rescatar que se está en contra de las desigualdades sociales y busca que exista un tipo de comunismo social, pero ¿acosta de qué piensa lograr su objetivo?

En la *Declaración de principios del PAN* (2012), en el parágrafo 5 se afirma:

La Nación es comunidad de comunidades, unidas por diversos vínculos, con origen y destino común. Se reconoce como la suma de sus partes y se enriquece con el aporte socialmente responsable de las mujeres y los hombres que la componen. Brinda comunión de pasado, de presente y de destino.

Es evidente que en esta declaración se privilegia al individuo por sobre el grupo social.

En el parágrafo 119 del programa de acción que constituye la operación pragmática de los principios ideológicos se enuncia:

Requerimos una política de desarrollo empresarial e industrial que, dentro de la formalidad productiva, nos inserte exitosamente en la globalización, compitiendo con los productos y servicios que potencien nuestras ventajas a través del fortalecimiento del mercado interno, la creación de cadenas productivas y de una reforma al sistema financiero que facilite el crédito y la inversión.

En el anterior contexto queda anclada al mercado, tanto interno como global, la idea de progreso mediante el desarrollo empresarial e industrial.

Mientras tanto, en la *Declaración de principios del PRI* (2017), en el parágrafo 38, se cita:

Somos un Partido responsable y de valores nacionalistas que concibe a nuestra soberanía como el fundamento es-

tratégico para influir en el proceso de globalización y para orientar la política exterior.

La anterior declaración justificaría un totalitarismo no de carácter estatizado como en el socialismo, pero sí nacionalista, en cuanto se asume la soberanía de la nación como eje rector de la política exterior.

En el segundo párrafo del parágrafo 31 se afirma: “Queremos una ciudadanía sustentada en el empoderamiento económico de hombres y mujeres, basada en la igualdad económica, política, social y de género”. Lo anterior denota una inclinación más por el ciudadano como parte del grupo social, que, por la persona en lo individual, pues la ciudadanía integral es la base del desarrollo de la sociedad.

En el tercer párrafo del parágrafo 21 se agrega:

Estamos comprometidos con el fomento a la vocación emprendedora de las micro, pequeñas y medianas empresas; la integración de una política agropecuaria y pesquera nacionalista; la economía mixta, el apoyo al desarrollo rural que incremente la producción y productividad en el campo; asegure la cohesión social y la competitividad de nuestras y nuestros productores. Que, como tema de seguridad nacional, se resuelva la soberanía y la seguridad alimentaria de los y las mexicanas con tecnología de vanguardia.

En la anterior declaración prevalece la propiedad privada de carácter nacionalista, en cuanto que reconoce una economía basada en la propiedad de micro, pequeñas y medianas empresas, pero subordinadas a una soberanía de carácter nacional, en cuanto que tales empresas deben asegurar una cohesión social, que garantice y resuelva una soberanía y seguridad de subsistencia para los mexicanos.

El parágrafo 34 añade:

Nos pronunciamos por una sociedad en donde la igualdad sustantiva y la paridad de género sean una realidad, que contribuya al establecimiento de una cultura de respeto e inclusión entre los hombres y las mujeres, donde todas las personas puedan gozar de los mismos derechos fundamentales y posibilidades de progreso personal y profesional y contribuir al desarrollo del país.

Es evidente que, en la anterior declaración, las políticas públicas que son el instrumento técnico para promover el progreso, se encuentran subordinadas a la naturaleza, lo que acota el progreso y lo vuelve hasta cierto punto heterogéneo y anárquico, pues dicho progreso se vuelve *disparejo* en aras de privilegiar tradiciones regionales, incluso en el uso de las tecnologías más armónicas con la naturaleza.

Inclusive, el PRD, en su *Declaración de principios* (2015), en el capítulo de *Identidad partidaria* manifiesta que:

Aspira a construir un socialismo democrático que respete las libertades, las garantías individuales, derechos humanos, justicia social y se construya desde abajo mediante la participación de la sociedad organizada en las decisiones fundamentales.

Lo anterior evidencia que lo individual queda subordinado a lo total-social en pro de la construcción de un socialismo democrático.

En materia de propiedad, en el capítulo de *Economía* se reconoce que:

Es indispensable garantizar la autonomía alimentaria del país, la defensa del ejido y de la propiedad comunal de la tierra. Reitera que los hidrocarburos son propiedad de la Nación. El PRD se encuentra en constante lucha en contra de la privatización de los bienes nacionales estratégicos, por lo que se proclama como principio fundamental su recuperación a favor de nuestra Nación.

Es claro que en la ideología perredista la propiedad privada no tiene relevancia.

En el mismo capítulo de *Economía* que se traduce como *Progreso* se asume:

Como alternativa al capitalismo neoliberal el PRD asume la necesidad de la intervención directa del PRD en la economía en las áreas estratégicas de alimentación, producción de energías limpias, telecomunicaciones, procesos de alta tecnología, caminos y puentes, medios de comunicación, sistemas financieros, proyectos de infraestructura nacional y regional, transferencia tecnológica para el desarrollo regional, mecanismos que protejan la

economía interna y con un comercio solidario entre las regiones del país, con las naciones latinoamericanas y del mundo. Esta fortaleza económica le permitirá cumplir mejor su papel regulador de la economía, acotándolo con mecanismos de control social.

En este capítulo de la ideología del PRD se evidencia cómo el progreso fuertemente descansa en estructuras estatizadas, que es una de las características de la ideología socialista.

Ahora bien, a manera de guisa, se exponen las votaciones del PRD en diversas iniciativas que evidencian elementos de partidocracia legislativa, incluso en contra de la ideología plasmada en su *Declaración de principios*. Sin que ello represente, como se apuntó al inicio del presente capítulo, que dicha entidad de interés público sea la única que incurre en ello.

El PRD se ha distinguido en la última década por ser un opositor en el Congreso de la Unión de las iniciativas presentadas por el *partido del presidente*. En ese tenor, a continuación se estudian algunos ejemplos del segundo periodo de sesiones del primero y segundo año de ejercicios legislativos de la Legislatura 2000-2003 de la Cámara de Diputados en materias como seguridad social, Hacienda y seguridad social, y que resultan emblemáticos para el presente estudio.

Seguridad social

Martes 17 de abril de 2001

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del ISSSTE (para homologar las pensiones de los jubilados con las percepciones de los trabajadores en activo), en lo general y en lo particular (anexo 1).

En el numeral 7 del programa de acción, el PRD aborda el tema de la seguridad social universal, es por ello que los diputados del Congreso emiten una votación a favor de la ley presentada, ese es su sustento ideológico, ya que menciona dicho numeral que la seguridad social será convertida en sistema universal en beneficio de toda mexicana y mexicano quienes, por serlo y residir en el territorio nacional, tendrán derecho a la jubilación o a una pensión vitalicia y suficiente que garantice una vida digna. Ello, con relación a la previsión del cita-

do documento, por lo que se considera que su votación, en este caso concreto, es congruente con su ideología.

Hacienda y seguridad social

Miércoles 24 de abril de 2002

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) (anexo 2).

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular los artículos 3º, 18, 74 Bis, sexto y octavo transitorios reservados, con las modificaciones) (anexo 3).

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular los artículos 37, 43 y 48 reservados, en sus términos) (anexo 4).

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular el artículo 123 reservado con la modificación) (anexo 5).

los anexos 2, 3, 4 y 5, correspondientes a las votaciones del 24 de abril de 2002, puede haber incongruencia ideológica en casos diversos por parte del PRD. Esto es, se advierte en el anexo 1 que en la votación del 17 de abril de 2001 y en temas de igual materia, como los discutidos y aprobados por el PRD ese día, vota a favor del proyecto presentado, ello en congruencia con su ideología; mientras que, en las votaciones del 24 de abril de 2002, cuando se trata de temas de Hacienda y Seguridad Social, vota contrariamente a su ideología, lo que constituye el concepto de *partidocracia*, que se propone en el presente estudio sin prejuzgar si el PRD tuviera una justificación ideológica en el caso, ya que las votaciones de los anexos *sólo ilustran el método*, como puede medirse cualitativamente la partidocracia desde una perspectiva ideológica, ya que de acuerdo

al paradigma que se propone en este trabajo, las ideologías son el sustento del mandato popular otorgado en las urnas a los candidatos conforme a ideologías que identifican a cada partido.

Conclusiones

La partidocracia legislativa mexicana representa una descomposición del sistema de partidos y el deber que éste tiene para el fortalecimiento del sistema político, el respeto al mandato popular y la construcción de ciudadanía. Dicha partidocracia ha privilegiado los intereses económicos y políticos de una élite que deja de lado al ciudadano para verlo sólo como votante que acudirá a las urnas en los términos y bajo las condiciones que se le convoque. Ello, en virtud de que los partidos políticos se han olvidado de la ideología que está consignada en sus documentos básicos y que, en teoría, representan el fundamento y motivo de su nacimiento a la vida pública para dar paso a convertirse en vehículos que llevan personas a elecciones y, eventualmente, al poder.

En consecuencia, la partidocracia legislativa mexicana evidencia que los partidos políticos representados en los órganos legislativos, en diversos casos, buscan que los otrora candidatos postulados por éstos actúen en términos antiideológicos, bien sea presentando iniciativas o votándolas a favor o en contra, sin que dichas acciones fundamentales de la actividad parlamentaria sean consistentes con la ideología del partido político que los postuló.

Referencias

Duverger, M. (1996). *Los partidos políticos*. México: Fondo de Cultura Económica.

Morán, T.E. (2017). *Descifrando la partidocracia mexicana*. México: Porrúa.

Osorio, M. (2000). *Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales*. Argentina: Heliasta.

Electrónicas

Declaración de principios del PAN. (2012). Recuperado de <https://www.eleccion2012mexico.com/partidos-politicos/pan/declaracion-de-principios-del-pan>

- Declaración de principios PRI. (2017). Recuperado de <http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/DeclaraciondePrincipios2017.pdf>
- Declaración de principios del PRD. (2015). Recuperado de http://www.prd.org.mx/documentos/basicos/DECLARACION_PRINCIPIOS.pdf
- Holgado, M. (2003). *Consideraciones sobre la necesidad de revisar el papel de los partidos políticos en la democracia actual*. Sevilla, Recuperado de <http://congreso.us.es/cidc/Ponencias/electoral/MariaHolgado.pdf>.
- Instituto Nacional Electoral. "Fuerza Electoral por Partido Político 2018. Diputados MR". *Sistema de consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018*. Recuperado de <https://siceen.ine.mx:3000/#/fuerza-electoral>.
- Luetich Andrés (2002). *Clasificación de las ideologías políticas*. Publicación: Actas de la Academia Luventicus (Actas Acad. Luv.). ISSN 1666-7581. Recuperado de <ftp.luventicus.org/trabajos/02AAL002.pdf>
- Morán, T.E. (2017). Transfuguismo: dicotomía entre la lealtad partidaria y la participación política. Una visión desde los precedentes judiciales en México. Revista *Dikaion*, 31 (26), Núm. 1. Chía, Colombia. Junio 2017. Recuperado en <https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/7367>
- O`Donell, G. (2007). Las crisis perpetuas de la democracia. *Revista Polis*, 3 (1). Recuperado de [Dialnet-LasCrisisPerpetuasDeLaDemocracia-2515214.pdf](http://dialnet-lasCrisisPerpetuasDeLaDemocracia-2515214.pdf).
- Proyecto de Decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del ISSSTE (para homologar las pensiones de los jubilados con las percepciones de los trabajadores en activo). Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx>
- Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo general y en lo particular los artículos no reservados). Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx>
- Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular los artículos 3o., 18, 74 Bis, sexto y octavo transitorios reservados, con las modificaciones). Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx>
- Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular los artículos 37, 43

y 48 reservados, en sus términos). Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx>

Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (en lo particular el artículo 123 reservado con la modificación). Recuperado de <http://www.diputados.gob.mx>.

Anexos. Votación

Cuadro I

Votos	Total	PRI	PAN	PRD	PVEM	PT	PSN	CONV	PAS	IND
Favor	444	177	194	50	11	6	3	1	2	0
Contra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abstención	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quórum	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Ausente	54	32	13	2	4	2	0	0	0	1
Total	500	210	207	52	16	8	3	1	2	1

Cuadro II

Votos	Total	PRI	PAN	PRD	PVEM	PT	PSN	CONV	PAS	IND
Favor	285	100	173	0	11	0	0	0	0	1
Contra	76	28	0	38	0	5	2	1	1	1
Abstención	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0
Quórum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausente	127	71	31	15	5	3	1	0	1	0
Total	499	207	207	53	16	8	3	1	2	2

Cuadro III

Votos	Total	PRI	PAN	PRD	PVEM	PT	PSN	CONV	PAS	IND
Favor	294	104	179	0	9	0	2	0	0	0
Contra	63	21	0	34	0	6	0	1	0	1
Abstención	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Quórum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausente	131	71	28	19	7	2	1	0	2	1
Total	499	207	207	53	16	8	3	1	2	2

RETOS DEL PLURALISMO JURÍDICO ANTE LA REALIDAD DEL DERECHO

Cuadro IV

Votos	Total	PRI	PAN	PRD	PVEM	PT	PSN	CONV	PAS	IND
Favor	294	110	177	0	5	0	2	0	0	0
Contra	57	17	0	31	0	7	0	1	0	1
Abstención	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Quórum	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausente	139	71	30	22	11	1	1	0	2	1
Total	499	207	207	53	16	8	3	1	2	2

Cuadro V

Votos	Total	PRI	PAN	PRD	PVEM	PT	PSN	CONV	PAS	IND
Favor	326	124	169	21	8	0	2	1	0	1
Contra	22	6	1	9	0	6	0	0	0	0
Abstención	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0
Quórum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausente	147	74	37	22	8	2	1	0	2	1
Total	499	207	207	53	16	8	3	1	2	2